

EL CACIQUISMO EN LA ESPAÑA RECIENTE. EL CASO DE CASTILLA Y LEON

José Manuel Rodríguez Acevedo
Universidad de La Laguna (Tenerife)

Nota del Autor

Este ensayo se enmarca en el proyecto de investigación “Urbanización del territorio y política local en la Democracia Española: a vueltas con la cuestión agraria”, código SEJ2007-60612, financiado por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de la resolución: 9/10/2007).

Introducción

La actual España de las Autonomías hace necesario abrir, a nuestro entender, una línea de investigación que desde la perspectiva de las ciencias sociales profundice en la subsistencia del caciquismo semifeudal. En el grupo de investigación sobre ‘El Capitalismo Burocrático en la Explicación del Subdesarrollo y el Atraso Social’, de la Universidad de La Laguna, partimos de la siguiente hipótesis: pese a las relevantes transformaciones acaecidas durante un largo período de más de cien años, el sistema político que se configura a partir de la Constitución de 1876 —durante la primera Restauración de la monarquía borbónica— tenía la misma naturaleza caciquil que el sistema articulado a partir de la Constitución de 1978, en lo que vendría a ser la segunda Restauración de los Borbones. El régimen canovista presentaba, en última instancia, la misma esencia que el de la Transición posfranquista. Dos etapas unidas por una similar estructura subyacente del poder político: la monarquía parlamentaria caciquil [1].

Se entiende aquí por caciquismo todo un sistema de organización social y política articulado verticalmente desde el ámbito local hasta el nacional, que se desarrolla históricamente en aquellos países en los que no se produjo o no culminó la revolución burguesa durante el siglo XIX y, por tanto, subsistió la semifeudalidad a nivel económico, social, político y cultural. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. El caciquismo se encuentra en la base de su poder y es la expresión política del dominio económico de unas oligarquías lideradas por los grandes propietarios del suelo, ya sea rústico (actividades agrarias) o urbano (actividades inmobiliarias). No está representado sólo por los caciques propiamente dichos, sino que comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios y agentes, que conforman estrechas redes mediante las cuales los sistemas de autoridad estatal se engarzan con los sistemas de autoridad social que se desarrollan en la base de las comunidades.

Estas redes complejas, capaces de bordear la legalidad, tienden a controlar las instituciones y las formas de organización política, social, cultural y, en general, todos los aspectos relevantes de las comunidades, rurales o urbanas. El caciquismo surgirá históricamente vinculado a sistemas políticos parlamentarios (monarquías o repúblicas), lastrando el desarrollo de las instituciones liberales. En aquellos países en los que la crisis del sistema parlamentario llevó a la instauración, en un determinado momento, de regímenes dictatoriales de carácter fascista, el caciquismo tenderá a subsistir, amoldándose a las nuevas estructuras de dominación política e impregnando las nuevas formas estatales de todos los elementos estructurales que son consustanciales al sistema caciquil.

A partir de este enfoque, vamos a indagar en un caso concreto que nos revele algunas características del sistema político imperante en la España del presente. Hemos buscado en la prensa y en la bibliografía provincial y regional de Castilla y León los datos y evidencias que nos permitan profundizar en esa realidad. Aparentemente nos encontramos en un país cosmopolita y moderno, pero a continuación comprobaremos cómo todavía hoy persiste esa “terquedad local y provincial”, por decirlo en palabras de Marx, que nos retrotrae a una España añeja y con estructuras de poder absolutamente semifeudales.

Café para todos

Durante la dictadura de Franco, la imposición de un centralismo burocrático no hizo desaparecer el provincialismo. Muy al contrario: revivió a través de esos capitanes generales y gobernadores civiles que tenían a su disposición la maquinaria de un poder arbitrario. Eran el instrumento principal del centralismo burocrático pero, al mismo tiempo, fortalecían el caciquismo a base de fomentar las diferencias provinciales. Igual que sucedió en los años de la Segunda República, durante la Transición se tuvo que abordar nuevamente la cuestión nacional y se optó por lo que se ha denominado “*café para todos*”. Una fórmula para reconducir la cuestión nacionalista que afectaba a distintas regiones del país por un camino que no cuestionara las bases del sistema. La opción de las autonomías difuminaba el problema y lo reducía a un mero formalismo de organización territorial.

La idea ya había sido expresada durante la segunda República por destacados políticos derechistas como José Calvo Sotelo: “Si Cataluña tiene su Estatuto, Vasconia y Galicia deben tenerlo también. Pregunta por qué no, asimismo, las demás regiones, con una Generalidad en Sevilla, otra en Zaragoza, otra en Burgos, etc. Termina diciendo: Estatutos para todos o para ninguno” [2]. La autonomía se proclamó en regiones en las que a lo largo de la historia nunca había existido una verdadera reivindicación nacional. Aunque se generaron diferencias a partir de la vía constitucional por la que cada región accedió a la autonomía (la vía del artículo 151 o la del 143 de la Constitución), en los años ochenta España entera quedó organizada en 17 Comunidades y 2 ciudades autónomas en los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla.

¿En qué ha devenido esa administración autónoma en la mayoría de las regiones? En un medio de perpetuar el caduco caciquismo, que se reestructura para adaptarse al nuevo marco democrático-burgués establecido. La descentralización política y administrativa serviría básicamente para colocar bajo el dominio directo del viejo y del nuevo caciquismo los poderosos resortes del poder regional y provincial (José Carlos Mariátegui, 1996). La descentralización judicial que pretende impulsar el gobierno socialista, con el argumento de la adaptación de la justicia a la estructura autonómica

del Estado, sería una profundización en este proceso. La reforma judicial convertiría a los tribunales superiores de justicia de las diferentes Comunidades Autónomas en la última instancia judicial en sus respectivas comunidades, reduciendo el papel del Tribunal Supremo a la unificación de doctrina. Además, se descentralizaría también el gobierno del poder judicial, con la creación de los consejos autonómicos del poder judicial, en los que una parte de los miembros serían elegidos por los parlamentos autónomos. Todo un sueño de los caciques regionales hecho realidad: *que los trapos sucios se laven en casa*. La reforma de la financiación autonómica serviría para rematar todo el proceso.

La gran propiedad de la tierra —rústica y urbana— y el caciquismo imprimen su sello en la dispersión y fragmentación de los partidos locales, provinciales o regionales, en los enfrentamientos entre camarillas locales, provinciales y regionales en los partidos nacionales (conservador o liberal), en los pleitos por el reparto del poder autonómico entre capitales de provincia, provincias, etc. Igualmente, la huella del caciquismo se percibe también en la organización de la Administración Pública de las comunidades autónomas, estructuradas en una serie de “reinos de taifas” más pequeños que son entregados a unos consejeros, viceconsejeros, directores generales, presidentes y consejeros de diputaciones y cabildos insulares, convertidos en verdaderos reyezuelos al servicio de variados y a veces contrapuestos intereses económicos y políticos de sectores oligárquicos.

En la investigación que hemos realizado en las provincias de la autonomía castellano-leonesa encontramos testimonios fehacientes de que la fragmentada realidad política y administrativa de Canarias no era una particularidad especial de estas Islas derivada principalmente del hecho insular, como en las Islas suele creerse. Por el contrario, la misma política caciquil que sufrían y siguen sufriendo diariamente, de una y otra forma, los sectores populares del Archipiélago latía también vigorosamente en las provincias de Castilla y León.

La construcción de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Uno de los momentos en los que toda la “terquedad local y provincial” del viejo caciquismo semifeudal salió abiertamente a la luz fueron los años ochenta, cuando se

estaba configurando el mapa autonómico español. En esos años la prensa provincial y regional reflejó “con pelos y señales” y en su verdadera dimensión toda esa fragmentación de intereses económicos y políticos consustancial al régimen caciquil que subsistía con fuerza a lo largo y ancho del Estado. Gamonales y gamonalillos [3] de todo tipo salieron a la palestra para defender sus intereses faccionales, de bandería, poniendo de manifiesto que en la España contemporánea no se había producido —o adolecía de grandes limitaciones— el proceso de centralización de los medios de producción, de la propiedad y de la población que, impulsado por la burguesía, hubiera generado la centralización política, acabando progresivamente con el fraccionamiento de territorios, por decirlo en palabras de Marx, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes.

El fracaso —por una u otra vía— de la revolución burguesa en el siglo XIX y la consiguiente subsistencia semifeudal se manifestaban en las últimas décadas del siglo XX en la persistencia del particularismo político caciquil. Sobre tal base económica y política, la España de las Autonomías que se construye en los años ochenta no podía ser más que un artificio, condenado a convertirse en el nuevo escenario de la vieja política caciquil, de las alianzas y pugnas de las banderías en su intento por continuar indefinidamente con su estrategia de apropiación de los recursos —humanos y materiales— del país.

➤ La cuestión de Segovia

En el proceso de gestación del “engendro” que fue, ciertamente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los problemas comenzaron desde finales de los años setenta, situándose uno de los primeros focos de conflicto en la provincia de Segovia.

En octubre de 1979 cinco parlamentarios de la UCD segoviana suspendieron su presencia en los órganos del ente preautonómico creado el año anterior, en tanto no se asegurasen a esa provincia sus derechos fundamentales en la Autonomía que se estaba gestando. Meses después se produce la dimisión de Modesto Fraile Poujade de su cargo de Consejero del interior de la pre-autonomía, convirtiéndose en uno de los principales defensores de la autonomía uniprovincial para Segovia.

La UCD segoviana —conformada, como en todos sitios, a partir del viejo caciquismo de la dictadura— se fracciona entonces en dos bandos: los defensores de la autonomía uniprovincial, en el que se sitúa el Presidente de la Diputación (Rafael de las Heras) y los de la incorporación en Castilla y León, entre los que se encuentra el Alcalde de la capital (José Antonio López Arranz). Los contrarios a la integración plantean que “el viejo centralismo de Madrid se verá simplemente sustituido por el neocentralismo de Valladolid, cuyas oligarquías serán las que ahora pasarían a administrar nuestros asuntos” [4].

Los apoyan importantes instituciones de la oligarquía segoviana como la Cámara Oficial de Comercio e Industria, la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana y la Cámara Agraria provincial de Segovia. En el bando de la integración se sitúa también, junto a una facción de la UCD, el Partido Socialista Castellano-leonés-PSOE. En unas declaraciones de Miguel Ángel Trapero —que más tarde sería Alcalde de Segovia hasta que en 1986 es derrocado por una moción de censura— denunció que los problemas para la integración de la provincia de Segovia en la autonomía castellano-leonesa se debían a que “el caciquismo quiere fronteras cuanto más cortas mejor porque el control se ejerce más fácil así, que cuando se diluye en áreas más grandes” (...) “Si nos quedamos al margen de la dinámica del Estado saldremos muy perjudicados. La UCD está haciendo que proliferen en este país los pequeños reinos de taifas donde manda el cacique de turno. Lo que frena la adhesión de Segovia al proceso autonómico son problemas entre la UCD” [5].

Finalmente, fue imposible conseguir en la provincia de Segovia un acuerdo entre las facciones en disputa para iniciar los trámites de la integración en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por lo que la incorporación de esta provincia se produjo por la fuerza del “interés nacional” (LEY ORGÁNICA 5/1983, de 1 de marzo, por la que se aplica el artículo 144, c, de la Constitución a la provincia de Segovia). Meses después, 54 senadores del Grupo Popular presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que sería desestimado por el Tribunal Constitucional el 8 de noviembre de 1984.

➤ La cuestión de Burgos

Poco tiempo después del problema de Segovia surgió el de Burgos, cuando importantes sectores de la oligarquía de esa provincia reivindicaron la capitalidad de la Comunidad Autónoma. En los inicios del ente pre-autonómico las instituciones se ubicaron en Burgos, donde residían los dos primeros presidentes del Consejo General de Castilla y León. Al parecer se trataba de un intento para atraer a esa Comunidad a las provincias Logroño y Santander, en las que los sectores oligárquicos discutían también sobre la incorporación o la constitución en autonomías uniprovinciales, como finalmente hicieron. Sin embargo, en la asamblea de parlamentarios y diputados provinciales celebrada en Salamanca en junio de 1981 se acuerda la designación de la villa de Tordesillas, a 30 km. de Valladolid, como sede de las instituciones autonómicas, consignándose así en el proyecto de estatuto publicado en septiembre de 1981. La elección de Tordesillas como capital de hecho de la Comunidad castellano-leonesa provocó la protesta generalizada de la oligarquía burgalesa. Para Juan María Bilbao Ubillos, la tensión generada por la capitalidad de esta Comunidad, sólo comparable al caso canario, “pone en evidencia el problema de fondo de la desarticulación o desvertebración territorial y las fuertes presiones de signo localista o provincialista para obtener alguna sede y poder así capitalizar políticamente lo que la opinión pública interpretaría como un éxito” (Juan María Bilbao, 2008: 75).

La protesta burgalesa, con manifestación incluida, fue encabezada por la *Junta Pro Burgos Cabeza de Castilla*, que no se limita a reivindicar la capitalidad de Burgos sino que también se posiciona contra la separación de Santander (la *montaña de Burgos*), Logroño, Segovia —que en estos momentos aún no había sido integrada—, y contra la integración en Álava de Treviño y La Puebla de Arganzón. La lucha de la Junta Pro Burgos contra la “decapitación de Castilla” fue secundada por el Ayuntamiento de Burgos, los Colegios de Abogados y Procuradores de Burgos, por el Colegio Notarial de Burgos, La Cámara de Comercio e Industria, el Círculo Católico de Obreros, los Amigos de la Universidad, el Colegio de Médicos, el Colegio de Veterinarios, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, etc [6]. Su opción autonómica pasaba por una Autonomía para Castilla La Vieja, con la exclusión de Valladolid, León, Zamora y Salamanca, pero “de no lograrse esta fórmula secular e histórica, la más inteligente y viable en la actualidad, Burgos desea la autonomía provincial, que es un mal menor”. Como argumento se esgrimía también que “ningún grupo tiene competencia para cambiar la Cabeza de Castilla. Sólo la tiene la voluntad racional de

cuarenta generaciones de castellanos. Sería necesario para ello un referéndum histórico de los vivos y los muertos, pero en el valle de Josafat no hay urnas ni papeletas” [7]. Se barajó incluso la creación de un partido burgalesista que defendiera exclusivamente los intereses y derechos de Burgos, prescindiendo de ideologías.

En mayo de 1982 el Ayuntamiento de Villadiego anuló su acuerdo de adhesión a Comunidad de Castilla y León con el razonamiento de que Burgos “que fue y pudo seguir siendo Cabeza de Castilla lleva camino de convertirse en un pueblo de la provincia de Tordesillas”. A esta decisión se unieron una veintena de municipios burgaleses, que contaron con el respaldo político de Alianza Popular de Burgos [8].

En 1987, con José María Aznar de presidente de la Junta de Castilla y León, se reabre de nuevo la polémica sobre las sedes de las instituciones de autogobierno de Castilla y León. Se decide que Valladolid sea la sede de Junta y Cortes, y Burgos la del Tribunal Superior de Justicia. Contra el acuerdo del Gobierno popular votaron en contra cuatro procuradores del mismo Grupo Popular: los burgaleses José María Arribas y Tomás Cortés, y los leoneses Jaime Lobo y José Eguiagaray. Tomás Cortés, de *Solución Independiente* amenazó con promover la segregación de Burgos de la Comunidad Autónoma.

➤ La cuestión de León

Otro problema, aún latente, es el de la integración de León en la comunidad autónoma de Castilla y León, una integración que fue rechazada por importantes sectores de la oligarquía leonesa desde los primeros momentos de la pre-autonomía, cuando Alianza Popular y la UCD se posicionaron, no sin ambigüedades, por la opción de “León solo”.

En julio de 1979 tiene lugar la encuesta de la Diputación entre los Ayuntamientos de la provincia, pronunciándose por “León solo” el 56,48% de los mismos. Unos meses después la UCD leonesa cambia de postura por la imposición, por “razones de Estado”, de Rodolfo Martín Villa, uno de los grandes caciques de la provincia durante la dictadura fascista. De este modo, los mismos ayuntamientos que se habían posicionado por la opción leonesista, votaban ahora mayoritariamente por la integración en Castilla y León. El PSOE, por su parte, optaba igualmente por la autonomía con Castilla.

Pero la cuestión de León no quedaría zanjada de esta forma. En abril de 1980 tiene lugar una gran manifestación por las calles de León a favor de la autonomía uniprovincial. Entre septiembre y diciembre de ese año son legalizados el PREPAL (Partido Regionalista del País Leonés) y el GAL (Grupo Autonómico Leonés). A comienzos de 1983 la Diputación de León, gobernada por la UCD, acordó dejar sin efecto su acuerdo de 1980 para iniciar el proceso de adhesión a la autonomía de Castilla y León. En ese mismo mes tiene lugar una manifestación a favor de la autonomía uniprovincial convocada por el PREPAL pero encabezada también por el presidente de la Diputación, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria y el alcalde de León, de Alianza Popular [9].

Un año más tarde, en 1984, tiene lugar otra manifestación en el mismo sentido. El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León explicaba así las razones de la manifestación: “León tiene de todo, de manera que nuestra provincia, en cualquier concepción de ir a la autonomía castellano-leonesa, simplemente sería ir de pariente rico a una familia pobre, y no cabe duda que iría siempre a dar, y jamás a recibir, por lo que no iba a tener ninguna ventaja uniéndose a Castilla, en vez de acceder a la autonomía uniprovincial” [10]. Apoyaban esta posición las facciones leonesas de la UCD y de Alianza Popular, mientras que el PSOE y el PCE optaban por la autonomía con Castilla. El administrativista Enrique Orduña, partidario de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, advertía “sobre la posible existencia de la sombra de un caciquismo aún no erradicado, planeando sobre actitudes emotivas y aunque sinceras, desinformadas” (Enrique Orduña, 1986).

La reivindicación de la autonomía uniprovincial o la de una autonomía con Zamora y Salamanca continuarían existiendo en las décadas siguientes. En 1994 la Unión del Pueblo Leonés, constituida en 1991 por la unión de varios grupos leonesistas, lanza la propuesta de un referéndum para separar León del resto de la Comunidad Autónoma, propuesta que han reiterado en otras ocasiones [11]. En la actualidad, el leonesismo continúa jugando un papel político de relativa importancia en la provincia de León, si bien ha experimentado agudas luchas faccionales que motivan el nacimiento en 2004 del Partido Autonomista Leonés-Unidad Leonesa, por iniciativa de José María Rodríguez de Francisco, uno de los fundadores de la UPL. Además, el leonesismo

choca con otro localismo: el bercianismo, inspirado en la animadversión y la rivalidad de algunos grupos de la comarca de El Bierzo hacia León, responsable, según los bercianistas, de la desaparición de la antigua provincia de Villafranca de El Bierzo. El bercianismo político también ha generado sus partidos políticos. En 1979 surgió el Partido de El Bierzo y en 1994 el Partido Provincialista de El Bierzo, que pretenden la creación de la provincia de El Bierzo, independizándolo de la de León a la que ahora pertenecen.

Regionalismo, provincialismo, localismo y faccionalismo

En los anteriores ejemplos de Segovia, Burgos y León hemos podido observar cómo tras los problemas derivados de su integración en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se encuentra la fragmentación política que predomina en todos aquellos territorios en los que subsiste el caciquismo. Pero el caciquismo es mucho más amplio y variado. Se percibe su huella disgregadora en toda esa multitud de organizaciones de ámbito local, provincial y regional que tanto abundan en muchas regiones de España y que ponen de manifiesto la tremenda fragmentación existente en la base económica. Nuevamente, la economía se expresa de forma concentrada en la política.

En el territorio de la antigua Castilla La Vieja y de León nos encontramos, además de a los ya mencionados, a la Agrupación Independiente de los Pueblos (Segovia), a la Agrupación Independiente de Ávila, a la Unidad Regionalista de Castilla y León, a Ciudadanos de León, a Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano, a la Alianza Regional de Castilla y León, a la Agrupación de Electores Independientes de Camarzana (Zamora), a la Unión Centrista de Muelas de los Caballeros (Zamora), al Partido Nacionalista de Castilla y León-PANCAL, a la Plataforma de Independientes de España-PIE (Medina del Campo), a la Unidad Popular Castellana, a la Candidatura Independiente, a los Independientes de El Bierzo, a los Independientes por León, a la Agrupación de Electores Independientes por Zamora-Unión del Pueblo Zamorano, a Alternativa por Castilla y León, a Ciudadanos de Burgos por Castilla La vieja, a la Alianza por Burgos, a Iniciativa por el Desarrollo de Soria, a la Agrupación Ciudadana (AGRUCI), a la Unión del Pueblo Salmantino, a la Alternativa Segoviana Independiente, a la Agrupación Palentina Popular, a Unidad por Burgos, a la Agrupación Independiente Comarca de Aranda, al Partido Interzamorano, a la

Agrupación Democrática de Independientes Sorianos, a la Unión de Electores Independientes Comarca Bañezana (León), etc.

En un artículo titulado ‘Subsistemas de partidos’ explican sus autores que “(...) una parte sustancial de los partidos regionalistas debe su presencia a la reorientación de las elites locales, provinciales o regionales que quedaron literalmente sin partido tras la desaparición de UCD, a las dificultades tradicionales de los sectores centristas y conservadores para su articulación política o al éxito de ciertas elites regionales para imponerse sobre los partidos de ámbito estatal en la agregación de ideas e intereses autonómicos” (Montero et al, 1995).

Pero, evidentemente, la huella del caciquismo no sólo se percibe en esa multitud de partidos y organizaciones localistas, provincialistas y regionalistas —que, al fin y al cabo, no dejan de ser minoritarias en Castilla y León [12]— sino también en las pugnas intestinas que tienen lugar en el seno de los partidos de ámbito nacional. Estos partidos en cierta medida no son más que coaliciones de facciones caciquiles lideradas por una serie de *barones* regionales o provinciales que aglutinan tras de sí a toda una pléyade de caciques locales, que son los encargados de asegurar —utilizando *todos* los medios a su alcance—, el éxito electoral.

Un ejemplo claro lo encontramos en la gran dificultad que tuvo la derecha española para organizar un partido conservador con un mínimo nivel de cohesión interna, cosa que no se logró hasta la fundación en 1989 del Partido Popular bajo el liderazgo de Aznar, que desde 1987 venía coordinando, desde la presidencia de la Junta, las múltiples facciones del caciquismo castellano-leonés. Explican Gunther, Sani y Shabad que el partido conservador Alianza Popular se organizó desde 1977 “a partir de una vaga confederación de notables, cada uno de los cuales poseía su propia base —clientelística y/o geográfica— caracterizada por una débil organización, una ausencia casi total de programa o ideología... y apoyada en las relaciones interpersonales jerárquicas de tipo feudal” (José Cazorla, 1994). Pese al éxito temporal conseguido por Aznar en su tarea de aglutinar a todos esos “notables”, el partido conservador seguiría manteniendo en las décadas siguientes su antigua naturaleza caciquil. En un artículo publicado en junio de 2008 el periodista conservador Emilio Campmany —desde la óptica del viejo centralismo burocrático— decía, refiriéndose a las pugnas internas que están teniendo

lugar en el PP, que “han despertado los viejos fantasmas de la derecha española: el fulanismo, el caciquismo, la lucha cainita y su peor secuela, el fraccionamiento regional degenerado hoy casi en cantonalismo” [13]. Y en otro publicado en octubre dice que “hasta los Gobiernos autonómicos supuestamente controlados por los dos grandes partidos nacionales están hoy al servicio de los caciques locales para conseguir de Madrid lo que sus intereses exigen” [14].

La naturaleza caciquil de los partidos nacionales: el caso del PP de Zamora

Un buen ejemplo de toda esta fragmentación interna nos lo proporciona la provincia de Zamora. Se trata, quizás, de un caso de extrema y singular virulencia, pero es precisamente el encarnizamiento al que se llegó en la lucha de facciones en el interior del PP zamorano lo que nos ha permitido vislumbrar la estructura caciquil que se mantenía incólume tras la aparente cohesión y unidad lograda por Aznar desde su llegada a la dirección del partido conservador. Comencemos por leer una crónica de lo sucedido allí durante las elecciones municipales de 1996:

José Emilio Aguirre [máximo representante de ASAJA en Zamora] había trazado una importante red de contactos en la provincia y la ayuda de sus cinco diputados provinciales le había permitido controlar buena parte de la geografía local, más allá de las comarcas donde tenía sus feudos tradicionales. Eso no le había permitido, sin embargo, controlar los foros internos de decisión del partido. Eso le llevaba a negociar las decisiones directamente en Valladolid y por lo general ante el propio Juan José Lucas. Su posición de fuerza dentro de la organización sindical agraria a nivel regional, el buen número de votantes del PP que ésta podría manejar y su condición de senador, le conferían ese privilegio.

Sobre el tapete no sólo estaba el control de la Diputación Provincial, sino descartar algunas aspiraciones a la presidencia, sino asegurar para Asaja la mínima representación en las Cortes de Castilla y León y garantizar a posteriori el acceso al parlamento nacional... (...) Esto permitiría seguir fortaleciendo a la organización agraria dentro del PP, cuestión esencial para mantener todo el entramado de intereses que necesariamente habría de generarse. Excepto el presidente de la Diputación Antolín Martín, Asaja tenía en frente a todos los demás, desde los oficialistas con José Manuel Peñalosa

como cabeza visible, hasta los críticos de Luis Calvo Aldea, sus, hasta ese momento, enemigos más vigorosos.

Pese a todo Asaja desdeñó la importancia que debe conferirse siempre a la estructura de una organización como la del PP y su dependencia de la palabra de sus órganos de decisión, por más desavenencias que haya o por más que su presidente no sea aceptado por la mayoría. La elaboración de las listas en los municipios se demostró como una lucha a brazo partido entre los hombres de la organización agraria y los fieles a la estructura del partido. El resultado fue dispar, pero sobre todo disparatado; en muchos municipios el PP era el único opositor del PP, es decir, que el PP imponía su lista y frente a ella presentaban, ora como independientes, ora como regionalistas, ora como centristas o lo que fuera menester, los miembros del PP cuya candidatura no aceptó la dirección popular. Se perdieron así un buen puñado de votos en los que algunos verían la pérdida de al menos un diputado más, y eso que se multiplicaron resultados.

Asaja colocó buen número de alcaldes y concejales, los suficientes como para, con algunos apoyos más por simpatía o a modo de rechazo a la dirección popular, garantizarse un resultado mínimo en la Diputación. No había pacto pero José Emilio Aguirre y la gente de su sindicato y del Partido logró unos más que apreciables resultados. (José Lera, 1996).

La lucha de banderías caciquiles en la provincia de Zamora estallaría finalmente un año más tarde, cuando se enfrentaron el “clan del alquitrán” contra la facción de los “aldeanos” o “asajos”. Los primeros estaban liderados por Dionisio García Carnero, que fue presidente del área de Obras en la Diputación y más tarde senador. Los segundos, por Antolín Martín, Presidente de la Diputación y representante del grupo de alcaldes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), principalmente de la comarca de Toro. La guerra entre ambas facciones fue encarnizada y tuvo una de sus batallas más sonadas en torno al cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obras públicas de la Diputación, comisiones que fueron denunciadas por el propio Antolín Martín en 1997 (*Caso Zamora*).

Finalmente el enfrentamiento se resolvió a favor de los del “alquitrán”. García Carnero se alzó a la presidencia del PP en Zamora y obtuvo un escaño de Senador por la provincia, cargo que aún posee, a pesar de que “son numerosas las voces que le sitúan como el principal responsable de la fractura definitiva que vivió el PP provincial, al no saber aunar los intereses de las distintas familias” [15]. Antolín Martín, por el contrario, fue desposeído de la presidencia de la Diputación en abril de 1997 al perder una moción de censura presentada en su contra por los catorce diputados de su propio partido, entre ellos los diputados de ASAJA, que negociaron la cabeza de Martín a cambio de las dos vicepresidencias de la institución [16]. En su intervención durante el debate de la moción, Martín “centró la mayor parte de sus críticas en el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, el secretario regional, Jesús Merino, y los cinco diputados vinculados a ASAJA para los que no ahorró calificativos como ‘felones, arteros, infieles, hipócritas, pérfidos, judas y proditores’” [17]. Por el contrario, no apoyaron la moción de censura los diputados del PSOE, para los que toda la operación formaba parte de un “pacto de silencio” para que nunca se supiera lo sucedido en el área de Obras de la Diputación zamorana.

En cuanto a José Emilio Aguirre, las cosas en el PP no debieron irle del todo bien puesto que años más tarde nos lo encontramos en las filas de la regionalista Unión del Pueblo Leonés (UPL) y posteriormente en Candidatura Independiente, una organización muy vinculada al sector de la construcción a la que se incorpora como coordinador provincial, con la función de elaborar las candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 [18].

El caso de Aguirre no es, por supuesto, el único en el que un responsable político de uno de los dos grandes partidos nacionales acaba, debido a las pugnas que se dan en el interior de estos partidos, incorporándose a la política regionalista o provincialista. Otro ejemplo lo encontramos en José María Moreno Balmisa, que primero fue militante del CDS y luego del Partido Popular —con el que llegó a ser diputado— para acabar por último fundando en 2002 la Unión del Pueblo Salmantino [19]. Juan Cascante Cabrerizo fue senador por el PSOE en Soria y posteriormente se integró en la Agrupación Democrática de Independientes Sorianos (ADIS), siendo su candidato para la Alcaldía de Soria. Otras veces el viaje es a la inversa. En 2005 una parte de los cargos y militantes de la Unión Regionalista de Castilla y León abandonaron esa organización

para integrarse en las filas del PSOE, del PP y de la UPS, lo que parece indicar que no era precisamente el compromiso con una determinada ideología o un programa político lo que les movía a la militancia.

Caciquismo y organización territorial: la administración local

Otra vía por la que también se puede percibir la huella del caciquismo en el sistema político de la *segunda restauración* nos la proporcionan los debates recurrentes sobre la organización territorial del Estado y de sus comunidades autónomas. En Castilla y León estos debates pasan siempre por la defensa del papel de las provincias y las diputaciones, igual que en Canarias pasan siempre por la defensa de la isla y los cabildos insulares. Empujados —e incluso obligados, en algunos casos— a la integración en esa amplia entidad territorial que es la Comunidad Autónoma, los caciques locales y provinciales que se encuentran repartidos por toda la región reivindicarán insistentemente la importancia de las provincias, frente a una posible tendencia a la centralización del poder político autonómico. Para esa reivindicación se optará por diversas estrategias.

En ocasiones, sobre todo al principio, se intentará defender el fortalecimiento de las diputaciones para enfrentarlas al gobierno autonómico. Otras veces se defenderá un modelo de organización autonómica concebida simplemente como una federación de provincias en la que la administración autonómica transferiría o delegaría a las diputaciones la mayor parte de sus competencias y funciones [20]. Y por último se reivindicará la necesidad de incorporar de modo explícito a las diputaciones provinciales en el proceso autonómico, convirtiéndolas en elemento integrante de su desarrollo. De ese modo, las diputaciones tenderán a irse configurando como órganos de gestión ordinaria de los servicios periféricos de las propias Comunidades, con el argumento de la gran distancia existente entre la Administración autónoma y los pequeños municipios del medio rural.

Según un Comité de Expertos sobre autonomías en mayo de 1981, las diputaciones “deben sostener el peso principal de la acción política en el marco de cada Comunidad Autónoma” (Sebastián Martín-Retortillo, 1991). Como declara el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Atilano Soto, en 1997, “somos autonomistas porque

somos provincialistas. Queremos una comunidad autónoma vertebrada en torno a las diputaciones” [21]. Se rechaza, pues, la potenciación de las comarcas y las áreas metropolitanas, impulsadas muchas veces por el PSOE e IU, porque se perciben como entidades que se podrían utilizar para oponerse a las diputaciones. El presidente de la Diputación de Salamanca es uno de los que apuesta por que la provincia sea el ámbito ordinario de gestión de los servicios, y aclara que “éste es un planteamiento del PP que tiene vocación provincialista” [22].

La importancia que tienen para el caciquismo local y provincial las diputaciones es mucha por varias razones. Por un lado, por el elevado presupuesto que manejan y porque se encargan de la distribución de fondos entre los municipios, “cauce muy singular de favores y de afirmación del poder político en los medios rurales” (Martín-Retortillo, 1991: 26-27). Son ellas las encargadas de ejecutar las obras públicas en los pequeños municipios, lo que pone en manos del caciquismo local una herramienta importante para la obtención de importantes beneficios a través de las actividades especulativas, muchas veces corruptas.

El *Caso Zamora*, al que nos referimos antes de pasada, es un buen ejemplo de estas prácticas corruptas. En la lucha de banderías que tuvo lugar en el seno del PP zamorano entre la segunda mitad de los años noventa, el cabecilla de uno de los bandos —Antolín Martín, Presidente en aquel momento de la Diputación Provincial de Zamora— decidió “tirar de la manta” y denunció ante la fiscalía a la facción rival, que controlaba el área de Obras de la Diputación que él mismo presidía, por la práctica de cobrar comisiones a los constructores a cambio de la concesión de obras públicas. Recordemos entera, porque no tiene desperdicio, una de las crónicas del caso que se publicaron en la prensa del momento:

Constructores zamoranos ratifican que el PP cobró comisiones ilegales a cambio de obras | El presidente de la Diputación denunció a su propio partido ante el fiscal

JOSE L. LOBO
ENVIADO ESPECIAL

ZAMORA.- Un grupo de empresarios zamoranos de la construcción ha respaldado las acusaciones formuladas ante el fiscal por el presidente de la Diputación provincial, Antolín Martín, recientemente suspendido de militancia por el PP, sobre la concesión de obras a cambio del supuesto pago de comisiones ilegales a dirigentes del partido.

Según el testimonio del propio Martín y de los constructores, esas comisiones no sólo fueron a parar a los bolsillos de los principales miembros de la cúpula del PP en Zamora, sino que habrían servido también para financiar al partido durante la época en que el presidente del Gobierno, José María Aznar, fue máximo responsable del PP en Castilla y León.

El pasado 24 de febrero, Martín denunció ante el fiscal jefe de la Audiencia de Zamora, José María Caballero, que los principales líderes provinciales del PP, compañeros de partido hasta hace tan sólo unas semanas, se habían embolsado, al menos en el periodo comprendido entre 1983 y 1991, comisiones ilegales millonarias que habían sido pagadas por constructores de la provincia a cambio de la adjudicación de obras.

Martín ha ratificado ante EL MUNDO, punto por punto, lo declarado al fiscal, y no ha dejado títere con cabeza. Según el presidente de la Diputación de Zamora, entre los principales responsables de esta supuesta trama de corrupción está el senador y presidente del PP zamorano, Dionisio García Carnero, antiguo responsable de Obras en la Diputación; Luis Cid, diputado autonómico en la Junta de Castilla y León y ex presidente de la Diputación, o José Manuel Peñalosa, actual portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE y ex vicepresidente de la Diputación zamorana.

DISPOSICION A DECLARAR.- Martín ha basado buena parte de sus denuncias ante el fiscal en las confesiones del constructor zamorano Eduardo Corrales, grabadas en una cinta magnetofónica a la que ha tenido acceso este periódico, y que el empresario ratificó el pasado viernes al fiscal Caballero.

Al menos otros dos constructores supuestamente extorsionados por dirigentes del PP zamorano, y cuya identidad este periódico se ha comprometido a mantener de momento en secreto, han expresado ya su disposición a declarar ante el fiscal si son llamados por éste.

Asimismo, el máximo responsable de IU en Zamora, Francisco Guarido, ha sido citado hoy por el fiscal Caballero para relatar las denuncias de extorsión formuladas a la coalición de izquierdas por otro constructor zamorano.

En su declaración ante el fiscal, el constructor Eduardo Corrales explicó que, cuando se trasladó a Zamora desde el País Vasco, a mediados de la pasada década, tuvo que pagar al entonces responsable de Obras de la Diputación, Casto Lorenzo, dos millones de pesetas para el partido - entonces Alianza Popular- en concepto de anticipo si pretendía que la Diputación le encargase la realización de alguna obra.

“Me dieron su palabra de caballeros de que aquello no iba a trascender, y efectivamente así ocurrió; fue pasando el tiempo y nos fueron entregando obras”, afirma el constructor extorsionado. Según su testimonio, en mayo de 1986 Casto Lorenzo le reclamó el 8% de cada obra realizada, dinero que, según le indicó éste, iba a parar a las arcas del partido.

“Me dijo que lo considerase una especie de impuesto revolucionario, y que esa era la práctica habitual entre los constructores de Zamora. Pude comprobar que había alguna gente que se negaba a pagar, pero, efectivamente, estaban muy discriminados”, según el testimonio del empresario, primero ante Antolín Martín y más tarde ante el fiscal Caballero.

Entre los años 1986 y 1987, Corrales asegura haber hecho entrega de cantidades millonarias en concepto de comisión tanto al diputado Lorenzo como al entonces presidente de la Diputación, Luis Cid, y que oscilaron entre los casi 3,5 millones de noviembre 1986 y 1.800.000 pesetas de abril de 1987.

ANTICIPOS Y BENEFICIOS.- “Las entregas de dos millones de pesetas como anticipos se hicieron famosas en Zamora, y recuerdo que algunos constructores, como César Amaña, se jactaban de que, por cada millón que entregaba al partido, sacaba 100 de beneficio”, según el testimonio de Corrales.

Antolín Martín, que siempre ha militado en las filas del PP, afirma que cuando llegó a la Presidencia de la Diputación, en 1991, tenía fundadas sospechas de que el tráfico de influencias y el pago de comisiones eran prácticas habituales, aunque carecía de pruebas. “Yo no estaba dispuesto a permitir”, asegura, “la corrupción ni el trasiego de maletines con dinero por los pasillos y despachos de la Diputación, así que lo primero que hice fue arbitrar una serie de mecanismos para que la Ley de Contratos del Estado se cumpliera a rajatabla, y eso es algo que muchos dirigentes del partido nunca me han perdonado”.

Dionisio García Carnero, presidente provincial del PP y uno de los dirigentes del partido señalados por el dedo acusador de Antolín Martín y los constructores, ha señalado a este periódico que las denuncias formuladas por Martín ante el fiscal obedecen a un deseo de venganza.

El actual presidente de la Diputación ha sido suspendido cautelarmente de militancia por la dirección nacional del PP por negarse a reponer en el cargo a los dos vicepresidentes de la corporación provincial zamorana, también miembros del PP y que previamente habían sido destituidos por Martín. [23]

El *Caso Zamora* acabó salpicando también a Juan José Lucas, que por aquellos meses había sido nombrado por Aznar vicepresidente y consejero de Presidencia y Administración territorial de la Junta de Castilla y León; e incluso salpicó al propio José María Aznar, que se querelló, siendo ya Presidente del Gobierno de España, contra el constructor zamorano Eduardo Corrales por un supuesto delito de injurias y calumnias. Este constructor, afiliado a Alianza Popular, declaró en 1997 ante la fiscalía de Zamora —y volvió a hacerlo en 1999 ante el Tribunal Supremo, a donde llegó el caso por estar imputados dos aforados— que tuvo conocimiento de que varios constructores de esa provincia habían realizado entregas millonarias para la financiación de la campaña

electoral de Aznar a la presidencia de la Junta, con la promesa de éste de que ese dinero se multiplicaría por cien en el futuro [24]. Uno de esos constructores ratificó posteriormente la versión de Corrales ante el Tribunal Supremo, precisando que él mismo llegó a entregar un millón de pesetas para dicha campaña, aunque no directamente en mano al candidato en cuestión [25]. Como era previsible, las diligencias del caso fueron finalmente archivadas por el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Zamora, a donde fue a parar finalmente el caso porque los aforados imputados dimitieron de sus cargos en el Congreso y el Senado para que la causa no continuara en el Tribunal Supremo. El juez de Zamora no dio credibilidad a la denuncia del popular Antolín Martín, que habría actuado con “la intención de perjudicar a las personas que le vencieron en las elecciones” a la presidencia del PP de Zamora en 1996. No obstante, el juez reconoció, eso sí, la existencia de múltiples irregularidades en la adjudicación de obras [26].

En el ejemplo anterior hemos podido observar la importancia que tiene el control de las diputaciones provinciales para el caciquismo. Por un lado, son instituciones que manejan grandes presupuestos, que son una importante fuente de ingresos —por la vía de la contratación administrativa— para las oligarquías económicas de las distintas comarcas de la provincia. Por otro lado, y relacionado con lo anterior, son una fuente de enriquecimiento ilícito de algunos diputados y, por último, una magnífica forma de financiación para unos partidos incapaces, según se advierte, de sostenerse con los ingresos legalmente recaudados (Fernando Jiménez, 2008).

No obstante, ninguna de estas circunstancias es, ciertamente, exclusiva de las diputaciones. En 1992 la Audiencia Provincial de Burgos ya había condenado por prevaricación continuada y otros delitos al alcalde de Burgos y a otros tres ediles del PP, junto a un empresario de la construcción, en el que fue conocido como “*Caso de la Construcción*”. La sentencia, que ha sido considerada como la primera que se dictó en España contra el delito urbanístico, consideró probado que el alcalde de Burgos y los tres concejales procesados habían beneficiado reiteradamente al constructor Méndez Pozo en la concesión de licencias de construcción [27]. A cambio de estos beneficios —según comentaron varias fuentes, aunque no se probó en el juicio— el constructor pagaba comisiones que servían para financiar al PP de Castilla y León [28]. No va desencaminado, por tanto, el Catedrático de derecho administrativo de la Universidad

Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Alejandro Nieto (1997: 52), cuando afirma que “están corrompidos hasta el tuétano los partidos políticos y los sindicatos, los ministerios de la Administración General del Estado, las Consejerías de las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los organismos autónomos y las sociedades estatales”.

Otro de los aspectos que hacen importantes a las diputaciones para el caciquismo es el papel que juegan como forma de articulación política del poder local en el seno de la provincia. Téngase en cuenta que su composición se efectúa a partir de los resultados de las elecciones municipales, repartiéndose los diputados entre todos los partidos judiciales que componen la provincia. De esta manera, en la diputación provincial se encuentra siempre bien representado el caciquismo rural. Pero además, las diputaciones provinciales se conciben como una forma de “superar los desequilibrios interregionales”, de tal forma que actúan de “auténtico contrapeso de las concentraciones metropolitanas”, “contrapeso de poder, que difícilmente puede alcanzarse si no se articula sobre esquemas institucionales con consistencia bastante, que frente a las metrópolis regionales, difícilmente pueden ofrecer capitales provincianas, núcleos rurales o, ni siquiera, posibles entidades comarcales” (Martín-Retortillo, 1991).

Son, por tanto, formas de contraponer políticamente el campo a la ciudad, asegurando a las áreas económicamente atrasadas, dominadas por el caduco caciquismo rural, un cierto peso político frente a las zonas industriales y urbanas, de mayor dinamismo económico y peso demográfico. Téngase en cuenta que la enemiga de todos en Castilla y León es siempre la provincia de Valladolid, que constituye el principal centro industrial de la comunidad —si bien las principales industrias están en manos del capital extranjero—, llegando a concentrar el 44% del PIB proveniente de la industria en la región. Los burgalesistas de la Junta Pro Burgos no la querían en *su* Castilla, ni los leonesistas de la UPL la querían en *su* León. Quizás no era tanto la industria lo que temían, sino el peso social y político que pudiera adquirir un proletariado fabril difícilmente controlable mediante los tradicionales mecanismos del viejo caciquismo rural.

Está claro, pues, que las diputaciones provinciales son importantes para el caciquismo. Pero no hay que llevarse a engaño por las apariencias, porque no son la única forma en que el caciquismo puede estructurarse políticamente para defender sus intereses. También puede hacerlo, evidentemente, en torno a las comarcas —léase, por ejemplo, el Consejo Comarcal de El Bierzo—, a las áreas metropolitanas o a las mancomunidades. Tampoco los que, como el PSOE, defienden la reducción del papel de las diputaciones provinciales en Castilla y León, son una especie de nuevos regeneracionistas, aunque ellos, desde la oposición, se intenten presentar de esa manera. Todo lo contrario, se sustentan en el caciquismo igual que lo hace el PP, y todas las diputaciones provinciales de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, además de dos gallegas (Lugo y Coruña) y una catalana (Barcelona), se encuentran bajo su control.

Téngase en cuenta que donde se localiza el nivel más básico de la pirámide en la que se estructura el régimen caciquil español es, inexorablemente, en los Ayuntamientos; en el caso de Castilla y León, en los 2247 que existen en la Comunidad Autónoma, de los que 1970 tienen menos de 1000 habitantes. Cualquier forma de organización territorial que se construya en España a partir de esa base será una de las formas posibles de estructuración del caciquismo. Su huella en la administración local no debe buscarse sólo, ni principalmente, en los sonados casos de corrupción que aparecen a diario en los medios de comunicación, sino en una serie continuada de “anomalías”, “irregularidades” y “errores” de todo tipo que caracterizan el ejercicio cotidiano del poder político local en todas las regiones de España.

Son precisamente estas prácticas cotidianas —a las que se unen de vez en cuando los mayores escándalos de corrupción, casi siempre urbanística— las que nos permiten reconocer claramente a la vieja administración caciquil latiendo vigorosa bajo las nuevas formas democrático-burguesas instauradas a partir de la Transición. Como ha afirmado Miguel Ángel Torres, el ex instructor de la *operación Malaya* y actual titular del juzgado de lo Penal número 5 de Granada, la corrupción no va ligada exclusivamente a la licencia de obra; “nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente” [29]. En este, como en otros aspectos —y pese a lo que

repiten, incansables, los autores más cercanos al *establishment*— [30] sigue siendo cierto lo que hace más de cien años afirmara Costa:

“no es nuestra forma de gobierno un *régimen parlamentario*, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un *régimen oligárquico*, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias. O dicho de otro modo: no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante sesenta años: al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla” (Joaquín Costa, 1998: 72-73).

Reflexión final

Con estos comentarios sobre la administración local finaliza nuestra aproximación a un tema tan candente como el del caciquismo en la España reciente y, en concreto, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Hemos pretendido mostrar que, por debajo de las formas democrático-burguesas que se instauran tras el fin de la dictadura fascista, continúa latiendo en España el viejo caciquismo semifeudal, adaptado a los nuevos escenarios que se han ido definiendo en cada momento. Un caciquismo que podemos rastrear en la tremenda “terquedad local y provincial” que, en la esfera política, subsistía en las décadas finales del siglo XX y continúa subsistiendo en la primera década del siglo XXI. Una “terquedad” política que se explica históricamente por el fracaso del proceso de centralización económica que, como enseñan Marx y Engels, correspondía a la burguesía impulsar en los siglos anteriores.

Alfredo Hernández Sánchez, Catedrático de Sociología de la Universidad de Valladolid, explica en un interesante trabajo cómo en el territorio de la actual Castilla y León no se generó durante el siglo XIX una verdadera burguesía. Todo lo contrario, la clase dirigente se caracterizaba porque “eran dueños de la tierra, propietarios agrícolas, y no estaba bien visto, socialmente, el ejercicio de la actividad empresarial”. De esta forma en la región “no surgieron personas nuevas que hicieran innovaciones en la estructura social castellano-leonesa, ya fuera en el campo industrial, en el intelectual, en lo económico, en lo artístico, etc.” (...) “Es decir, no existía una mentalidad de tipo capitalista. Se seguía con los valores sociales del rentismo” (...) “El comportamiento de

los castellano-leoneses estaba regido por el peso de la tradición” (Alfredo Hernández, 2004: 25-27).

Frustrado el proceso de centralización económica que sólo la burguesía podía encabezar, las clases dominantes, y particularmente los grandes propietarios de la tierra (rústica y urbana), se atrincheran en una multitud de pequeños territorios, a modo de “feudos”, desde los que defenderán políticamente sus atrasados intereses, bien agrupándose en todo tipo de partidos o coaliciones de ámbito local, provincial o regional, bien conformando facciones o banderías caciquiles en los partidos de ámbito nacional, que los necesitan como lo que son: conseguidores de votos en todo tipo de comicios. En el caso de Castilla y León, el peso de los intereses rurales en la política local es especialmente relevante. El 57,7% del total de alcaldes y concejales entre 1979 y 1987 procedían del sector agrícola, siendo el porcentaje más alto de España, seguido por el de Aragón, 57,6%, La Rioja, 50,5% y Navarra, 40,1% (Joan Botella, 1992: 155).

La fragmentación inherente a la política caciquil siempre ha sido una manifestación de la persistencia semifeudal. Dicha persistencia impide o dificulta el desarrollo de intereses comunes basados en una división nacional —o, cuando menos, regional— del trabajo y en una multiplicación del tráfico interior entre los territorios de las provincias. Para Hernández Sánchez, “en Castilla no han existido las sinergias colectivas que generen una conciencia como pueblo, como comunidad. Por lo tanto, no somos una nacionalidad. Por lo menos, desde el punto de vista sociológico. Más bien, seríamos un ‘sumatorio’ de nueve provincias” [31].

Al no haberse desarrollado históricamente en el territorio de Castilla La Vieja y de León una auténtica “comunidad de vida económica”, un sólido vínculo económico interno —por la inexistencia de una pujante burguesía— no se ha generado tampoco una verdadera psicología o cultura común y no existe, por tanto, una conciencia regional castellano-leonesa en que sustentar el artificio que es la Comunidad Autónoma. Frente a dicho artificio, sectores descontentos de las oligarquías caciquiles han venido buscando una “auténtica” identidad con la que justificar históricamente un cambio en el modelo autonómico para que éste se ajuste mejor a sus intereses económicos y políticos. Y algunos de ellos han pretendido encontrar la quintaesencia castellana y leonesa en los viejos reinos medievales de Castilla y de León; unos reinos que, realmente, nunca

fueron otra cosa que agrupaciones de feudos casi autónomos en manos de grandes propietarios de la nobleza.

Creemos que para comprender históricamente la pervivencia del caciquismo en la España reciente es conveniente estudiar su etapa más clásica, cuando el fenómeno se presentaba en su estado más puro y de forma más nítida, sin grandes subterfugios. Comprendiendo la naturaleza de la política durante la primera restauración borbónica resulta más fácil comprender luego la subsistencia de esa política durante la segunda. Fruto de ese razonamiento es la tesis doctoral que hemos defendido en abril de 2008 en la Universidad de La Laguna [32]. Ahora, en este ensayo, que se enmarca en el proyecto *Urbanización del territorio y política local en la Democracia Española: a vueltas con la cuestión agraria*, hemos pretendido mostrar que algunos de los más característicos rasgos estructurales de la vieja política caciquil de la primera restauración borbónica, que pudimos identificar en nuestra tesis doctoral, siguen plenamente vigentes en la segunda. No ha caducado en España, por lo tanto, la consigna que se gritara en Gijón en 1900: ¡Abajo el caciquismo, viva el pueblo! [33]

Notas

[1]: Afirma el catedrático de Ciencias Políticas José Vilás Nogueira que “la estructura subyacente del poder político apenas ha mudado respecto de la propia del siglo XIX: un régimen oligárquico-caciquil” (“Un año más de constitución, *El Correo Gallego*, 8-12-2008, disponible en: <http://www.elcorreogallego.es/opinion/ecg/un-ano-constitucion/idEdicion-2008-12-08/idNoticia-373294/9>).

[2]: *La Tarde*, Tenerife, 15-5-1936, p. 5.

[3]: Gamonal: *Am. Cen. y Am. Mer.* Cacique.

[4]: Carta de la Comunidad Castellana a los Ayuntamientos de la Provincia de Segovia, 14 de marzo de 1980 (González, 1981).

[5]: *El Adelantado de Segovia*, 13-3-80.

[6]: *El Diario de Burgos*, 16-2-1982.

[7]: José María Codón, '1981, el año más nefasto de la Historia Castilla', *El Diario de Burgos*, 6-1-1982.

[8]: *El Diario de Burgos*, 3-6-1982.

[9]: *Diario de León*, 31-1-1983.

[10]: *Diario de León*, 18-1-1983.

[11]: *Diario de León*, 17-5-1997.

[12]: Por ejemplo, tras las elecciones municipales de 2007, la Unión del Pueblo Salmantino sólo posee nueve alcaldes, de un total de 362 municipios que componen la provincia de Salamanca. La Unión del Pueblo Leonés, por su parte, posee diez alcaldes en la provincia de León, de un total de 211 municipios, y dos alcaldes más en la provincia de Zamora.

[13]: Emilio Campmany: 'Un PP cantonalista', *Libertad Digital*, 13-6-2008:
http://www.libertaddigital.com:6681/opiniones/opinion_44039.html.

[14]: Emilio Campmany: 'La culpa no es de Sanz', *Libertad Digital*, 10-10-2008:
http://www.libertaddigital.com:6681/opiniones/opinion_45805.html.

[15]: 'Dionisio García Carnero. El azote del denunciante del caso', *El Mundo*, 23-4-1999:
<http://www.elmundo.es/1999/04/23/espana/23N0040.html>.

[16]: 'Se olvidan de que sólo son un instrumento a nuestro servicio', *El Mundo*, 11-5-1997:
<http://www.elmundo.es/1997/05/11/espana/11N0023.html>.

[17]: 'Antolín Martín arremete contra Lucas y el PP en su última intervención', *El Mundo*, 27-4-1997: <http://www.elmundo.es/1997/04/27/espana/27N0025.html>.

[18]: *La Opinión de Zamora*, 15-2-2007:

http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1803_2_191276__Zamora-Candidatura-Independiente-ficha-como-coordinador-Jose-Emilio-Aguirre.

[19]: En 1991 estuvo implicado en un caso de corrupción electoral —mediante el voto por correo— del que finalmente salió absuelto ('Los votos de Balmisa', *El País*, 8-6-1991:

http://www.elpais.com/articulo/espana/CASTILLA_Y_LEON/SALAMANCA/ESPANA/PARTIDO_POPULAR_PP/CORREOS_Y_TELeGRAFOS/CONFEDERACION_SINDICAL_INDEPENDIENTE_DE_FUNCIONARIOS/ELECCIONES_AUTONOMICAS_/HASTA_1995/votos/Balmisa/elpepiesp/19910608elpepinac_18/Tes).

[20]: “Las diputaciones debe ser potenciadas, de forma que todo aquello que no requiera de una organización supraprovincial, como la Enseñanza, la Sanidad, la Defensa, las comunicaciones y Hacienda —competencias que perfectamente pueden seguir en Madrid—, todo lo que no requiera una estructura más global de la Administración, digo, debe transferirse a las diputaciones. Lo dijo Martín Villa hace cinco años y los hechos no le han quitado aún la razón: ‘Yo veo siempre a Castilla y León como una federación de sus nueve provincias’. Muchos, rendidos ante la imposibilidad práctica de modificar el mapa autonómico, pensamos igual.” (Fernando Aller, director del Diario de León, *Diario de León*, 18-5-97).

[21]: *El Diario de Ávila*, 13-5-1997.

[22]: *La Gaceta Regional de Salamanca*, 17-5-1997.

[23]: *El Mundo*, 12-3-1997: <http://www.elmundo.es/1997/03/12/espana/12N0050.html>.

[24]: ‘El constructor acusado de dar un talón a Aznar lo relató a siete testigos’, *El mundo*, 2-6-1997: <http://www.elmundo.es/1997/06/02/espana/02N0032.html>.

[25]: *El País*, 1-5-1999:

http://www.elpais.com/articulo/espana/CORRALES/_EDUARDO_/CASO_ZAMORA/AZNAR/_JOSe_MARiA/ESPANA/PARTIDO_POPULAR_PP/CASO_ZAMORA_PP/elpepiesp/19990501elpepinac_5/Tes/. Finalmente el PP se retiró de la denuncia para evitar —supuestamente— que Aznar tuviese que declarar en La Moncloa, en su condición de querellante (*El País*, 2-7-2000).

[26]: *El Norte de Castilla*, 18-2-2002.

[27]: *El Norte de Castilla*, 8-5-1992.

[28]: ‘Los trapitos de la financiación’, *La Vanguardia*, 1997: <http://www.iceta.org/otros.html>.

[29]: ‘Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas’, *La Opinión de Málaga*, 13 de noviembre de 2008.

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008111300_2_217327__Malaga-Torres-califica-como-corrupcion-nepotismo-practica-administraciones-publicas

[30]: Para Laporta y Álvarez “incluso se ha llegado a hablar, con notoria exageración y no poca mala fe, de corrupción generalizada” en la España democrática (Laporta y Álvarez, 1997: 13).

[31]: Entrevista a Alfredo Hernández Sánchez publicada en *La Opinión de Zamora* el 17-1-2005. Recientemente hemos asistido a una nueva manifestación de esta “idiosincrasia” en las resistencias que está encontrando el proyecto de fusión de las Cajas de Ahorros de la región, unas entidades financieras que han venido proporcionando financiación a las operaciones económicas de las oligarquías provinciales, de cuyas redes forman parte indiscutible. Una de las cuestiones en disputa es el lugar en el que se ubicará la sede de la entidad resultante de la fusión. El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, ya ha manifestado que puede ser en cualquier lugar menos en Valladolid, la capital de la Comunidad. Un problema similar se está dando en Andalucía, donde los socialistas de Málaga y Sevilla reclaman para sus respectivas ciudades la ubicación de la sede de la caja fusionada. Véase, *El País*, 14-1-2009:

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/PSOE/Malaga/desoye/Chaves/reclama/sede/caja/fusionada/elpepuespand/20090114elpand_8/Tes.

[32]: *Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife*, Ediciones Idea, 2009.

[33]: “Dice bien un periódico democrático, a propósito del grito de Gijón [¡abajo el caciquismo! ¡viva el pueblo!, agosto de 1900], que ese grito significa ‘decirles a todos los que gobiernan y a los que aspiran a gobernar, que la libertad es una palabra vana, llena de viento, mientras subsista el caciquismo; es sintetizar en una fórmula sencilla las aspiraciones nacionales; es oponer política a política y sistema a sistema; es establecer como principio y axioma que para que viva el pueblo, es preciso que desaparezca la oligarquía imperante’” (Costa, 1998: 103).

Bibliografía

BILBAO UBILLOS, Juan María (2008). Iniciativa autonómica y sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (pp. 63-124). En Ignacio Sáez Hidalgo (Dir.), *Derecho Público de Castilla y León*. Valladolid: Lex Nova.

BOTELLA CORRAL, Joan (1992). La galaxia local en el sistema político español. *Revista de Estudios Políticos*, nº 76, abril-junio, Extraído el 2 de octubre de 2008, de <http://revistas.cepc.es/revistas.aspx?IDR=3&IDN=233>.

CAZORLA, José (1994). El clientelismo de partido en España ante la opinión pública. El medio rural, la Administración y las empresas. *Working Paper*, nº 86, Extraído el 30 de octubre de 2008, de http://www.icps.es/archivos/WorkingPapers/WP_I_86.pdf

COSTA, Joaquín (1998). *Oligarquía y caciquismo. Como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla*. Madrid: Cición Ediciones.

GONZÁLEZ HERRERO, Manuel (1981). *La entidad histórica de Segovia. Raíz y fundamentos de la autonomía*. Segovia: el autor.

LERA, José (1996). Revuelta en el PP. En AA.VV., *Anuario de Castilla y León 1996*. Valladolid: Ámbito.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo (2004). Aspectos sociológicos del fracaso del capitalismo industrial en Castilla y León. *Praxis Sociológica*, nº 8, Extraído el 15 de septiembre de 2008, de:

http://www.praxissociologica.org/portal/lang__es-ES/tabid__8890/default.aspx

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Fernando (2008). Escándalos de corrupción y defectos de la financiación de los partidos políticos en España: situación actual y propuestas. *Studia Politicae* (en prensa).

LAPORTA, Francisco J. y Álvarez, Silvina (1997). *La corrupción política*. Madrid: Alianza Editorial.

MARIÁTEGUI, José Carlos (1996). Regionalismo y centralismo. En José Carlos Mariátegui, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Amauta.

MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián (1991). *La provincia, pasado, presente y futuro*. Madrid: Cívitas.

MONTERO, José Ramón, PALLARÉS, Francesc y OÑATE, Pablo (1995). Subsistemas de partidos. En Ricardo Chueca y José Ramón Montero (Eds.), *Elecciones autonómicas en Aragón*. Madrid: Tecnos.

NIETO GARCÍA, Alejandro (1997). *Corrupción en la España democrática*. Barcelona: Ariel.

ORDUÑA REBOLLO, Enrique (1986). *El regionalismo en Castilla y León*. Valladolid: Ámbito.

Resumen

En este artículo se describe la permanencia del caciquismo en la España del momento presente. Bajo un sistema democrático fundado a partir de una revolución burguesa inconclusa, el caciquismo ha conseguido sobrevivir y extender sus tentáculos por las instituciones. El caso concreto de Castilla y León pone de manifiesto algunas de sus particularidades: las pugnas territoriales, la complejidad política, la corrupción y la lucha por el poder local. Se trata de viejas oligarquías con modos de actuación casi feudales que, asombrosamente, siguen formando parte del sistema político español actual.

Palabras clave

Caciquismo, democracia, España, Castilla y León, corrupción.

Abstract

This article describes the permanence of the chieftaincy in the Spain of today. Under a democratic system founded on the basis of an unfinished bourgeois revolution, the chief has managed to survive and spread their tentacles over the institutions. The case of Castilla y Leon reveals some of its peculiarities: the territorial disputes, the political complexity, corruption and the struggle for local power. This is old oligarchies with almost feudal modes of action which, amazingly, still part of the Spanish political system today.

Key words

Chieftaincy, democracy, Spain, Castilla y Leon, corruption.